

MARIÁN HENS

ENTREVISTA A BRIAN WOOD

El comercio de armas ligeras

La caída en los gastos de defensa que han experimentado los antiguos bloques enfrentados durante la Guerra Fría ha aumentado la presión sobre sus industrias de armamento, obligándoles a competir por los mercados del llamado Tercer Mundo. Pero los países compradores no suelen encontrar la seguridad que buscan al adquirir armas. Y los estados exportadores acaban pagando de una forma u otra parte de la factura. En un sector que exige controles cada día más estrictos, los mecanismos de regulación existentes han quedado obsoletos y las nuevas iniciativas no bastan, explica Brian Wood de Amnistía Internacional.

Pregunta.- Estados Unidos ha levantado recientemente el embargo de armas estratégicas a América Latina. Rusia y los antiguos países de la Unión Soviética se han convertido en una fuente importante en la reventa de armas. ¿Se inicia un nuevo ciclo?

Respuesta.- Rusia y Estados Unidos están compitiendo por abrir mercados. No sé si eso constituye el inicio de una nueva carrera armamentista, pero desde luego no son datos esperanzadores para el futuro del control de armamentos. Es cierto que en el ámbito de las armas pesadas y estratégicas, los Estados tienen derecho a defenderse, como se recoge en el derecho internacional. Pero los antiguos países de la Unión Soviética están colocando muchas armas ligeras, procedentes de sus antiguos arsenales, en zonas de conflicto, por ejemplo en África. Eso no quiere decir, que Estados Unidos y Europa occidental no sean también proveedores de este tipo de armas. Pero hemos comprobado que cuando un país está sometido a un embargo internacional, las armas ligeras que

Marián Hens es periodista de la sección de Internacional de El Mundo. Brian Wood es el responsable de transferencias militares, de seguridad y policiales de Amnistía Internacional en el Secretariado de Amnistía Internacional en Londres.

Los mecanismos internacionales para controlar las armas convencionales, en particular las armas ligeras, son muy escasos y, los que existen, se han quedado obsoletos o son inadecuados.

circulan en su mercado negro proceden a menudo de las antiguas repúblicas centroasiáticas.

P.- *La Agencia de Control y Desarme estadounidense (ACDA) calcula que las armas ligeras mueven unos 6.000 millones de dólares al año. Gran parte de este mercado está integrado por restos de arsenales acumulados tras guerras civiles que no son destruidos y entran en el mercado negro.*

R.- *Ese es un problema que se produce, en parte, por una falta de estrategia a largo plazo de los países occidentales. Tras la guerra de Mozambique, por ejemplo, Naciones Unidas acumuló las armas decomisadas a la guerrilla en grandes almacenes; pero ese armamento nunca fue destruido. Cuando la ONU se marchó del país, los responsables de esos arsenales los vendieron a los Estados vecinos que estaban en guerra. El Gobierno español ha invertido grandes sumas en entrenar a la policía mozambiqueña y a la de Angola, la misma que después participó en varias matanzas de civiles. ¿No hubiera sido más útil invertir estos fondos en la destrucción del armamento requisado tras la guerra?*

P.- *¿Qué medidas institucionales existen para la regulación del comercio de armas?*

R.- *Los mecanismos internacionales para controlar las armas convencionales, en particular las armas ligeras, son muy escasos y, los que existen, se han quedado obsoletos o son inadecuados. La Carta de Naciones Unidas establece que la Organización debe controlar y regular las transferencias de armas. Pero durante más de 50 años la ONU apenas ha prestado atención a las armas ligeras. Sólo se han acordado algunas restricciones en el uso del láser y las minas. Pero los rifles de asalto, las granadas, las ametralladoras y muchas otras armas ligeras que protagonizan los conflictos de finales del siglo XX ni siquiera aparecen en el registro de armas convencionales de Naciones Unidas. Ha sido en los últimos años, y ante la necesidad de enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a zonas de conflicto, cuando el Secretariado General de la ONU ha reclamado la colaboración de los gobiernos en este campo. Al mismo tiempo, pequeños países, devastados por la guerra, han empezado a pedir medidas más estrictas para controlar este tipo de armas y detener el tráfico ilegal.*

P.- *¿Qué impacto han tenido esas peticiones?*

R.- *Recientemente la ONU designó a un plantel de expertos para que estudiaran la situación de las armas ligeras. Y elaboraron un informe lleno de recomendaciones sobre medidas de control y sobre la imposición de moratorias en el suministro de este tipo de armamento a ciertas regiones de la Tierra. Por su parte, la presidencia holandesa de la Unión Europea*

lanzó una iniciativa para garantizar un mayor control sobre el tráfico ilegal, que apoyan los Quince. Nosotros consideramos que estas propuestas aún son demasiado generales.

P.- *El ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, también ha puesto en marcha una política restrictiva en el comercio de armas. Por primera vez se relacionan las transacciones de armamento con la violación de los derechos humanos. ¿Cómo evalúa la propuesta? ¿Se trata de una excepción?*

R.- La iniciativa de Cook es muy importante, y el primer ministro francés, Lionel Jospin, se ha comprometido a examinarla detenidamente. Tradicionalmente los derechos humanos no eran un factor que se tuviera en cuenta a la hora de elaborar criterios para el control de armamento. Pero cada vez un mayor número de países y de políticos están empezando a reconocer que si las medidas que regulan la venta de armas continúan siendo tan ineficaces como hasta la fecha, seguirán produciéndose violaciones de los derechos humanos. Y esto no es sólo catastrófico para las personas sino que también tiene un impacto negativo en el desarrollo económico de las regiones afectadas y en las relaciones financieras de otros países con esas zonas. Algunas grandes multinacionales, por ejemplo, nos han contado cómo el aumento de la violencia, la desaparición de la ley y el orden y la ineficacia de las instituciones estatales en países del Tercer Mundo están perjudicando a sus negocios y estrategias de largo plazo. Algunas corporaciones petroleras, como la anglo-holandesa Shell en Nigeria o la británica British Petroleum (BP) en Colombia han contratado a sus propios guardias de seguridad para proteger a su plantilla, a sus instalaciones y a sus gigantescas inversiones. Pero después se han visto involucradas en situaciones de violación de los derechos humanos y temen por su reputación internacional. Así que han interpelado a sus propios gobiernos para que hagan algo. La mayoría admite hoy que el viejo hábito de buscar la estabilidad en un país sólo con medidas represivas no funciona. Interesa más contribuir a que se desarrollen democracias sólidas.

P.- *Robin Cook también ha cancelado la venta de licencias de fabricación de armas a países como Indonesia, uno de los principales clientes del Reino Unido...*

R. - Sí, esta es una novedad importante y un campo que los demás países de la Unión Europea deberían explorar. El Gobierno francés, por ejemplo, vende al argelino vehículos militares fabricados en Turquía con piezas y tecnología suministradas por el Reino Unido. Este tipo de vehículo es en un 80% británico, pero al ser montado en Turquía puede utilizarse contra la minoría kurda y ser exportado a países como Pakistán y Argelia donde existen constantes violaciones de los derechos humanos. Ocurre también con España. Las tropas de Laurent Kabila, que según sabemos ahora

cometieron terribles matanzas, se trasladaban en aviones de transporte Casa españoles procedentes de Zimbabue. Indonesia y Turquía también utilizan los Casa. Ahora están pidiendo tener licencia para fabricarlos en sus propios países. Si el Gobierno español les vende esa licencia, no podrá controlar el uso final que se haga de los aparatos. Es preciso que, cuando los gobiernos venden material militar a un determinado cliente, establezcan en el contrato de venta limitaciones al destino último de esos equipos. Ese tipo de regulaciones ya existe con las armas estratégicas y de destrucción masiva. No está permitido reexportar sistemas de misiles a países terceros. Y Estados Unidos no permitiría ni a sus aliados más cercanos revender cazabombarderos u otro material militar sofisticado.

P.- *¿Qué otras medidas propone AI?*

R.- La UE tendría que examinar nuevas medidas en relación con los fabricantes y vendedores de armas que dentro de la Unión operan con grandes contratistas y subcontratistas. Sería preciso reforzar el control aduanero en aeropuertos europeos que aún permiten operar a compañías con un historial dudoso en el tráfico de armas. Estos aeropuertos "frágiles" se convierten en puntos de tránsito para el tráfico ilegal. En el Mediterráneo por ejemplo, Malta ha canalizado armas serbias, Chipre e Italia son también puntos negros, el aeropuerto de El Cairo es punto de tránsito para armas procedentes de Europa Oriental con destino a Africa y Yemen, desde Tayikistán a Brazzaville. El Gobierno español ha admitido que sabía del paso por sus aeropuertos de cargamentos ilegales de armas procedentes de Israel con destino a Ruanda y Sudán. Además, los gobiernos occidentales deberían invertir más recursos en ayudar a los países africanos y asiáticos a controlar su espacio aéreo, sus fronteras y aduanas. Un país como Suráfrica, que tradicionalmente es una fuente de suministro de armas a zonas de conflicto en el continente negro, que ha exportado armas al Congo de Kabila y Argelia, necesita más recursos para controlar el tráfico por sus aeropuertos, material sofisticado para la inspección de cargamentos y formación de su policía aduanera en el uso de ese material.

P.- *¿Qué posición tiene España con respecto al control del comercio de armas?*

R.- El principal problema que plantea España es que el Gobierno no está cumpliendo los compromisos que ha adquirido ante la Unión Europea en el sentido de ejercer un control eficaz del tránsito de armas. España, al igual que Francia, tiene una historia de secretismo excesivo, no sólo en cuanto a las transacciones de armamento, también en cuanto a los procedimientos que regulan esas transacciones. A la opinión pública española no se le permite saber qué hace el Gobierno en ese sentido. Ni siquiera el parlamento puede indagar en este campo. La falta de transparencia significa que los ciudadanos españoles no pueden saber si un cargamento de

armas que atravesase su territorio es legal o ilegal. Eso pone en peligro a los trabajadores de la industria del transporte, al personal de aeropuerto, etc., que han de manejar envíos cuya legalidad o ilegalidad desconocen. Amnistía Internacional lleva meses esperando que las autoridades españolas cumplan sus promesas en cuanto a un control más eficaz del tráfico de armas. Siguen hablando y no hacen nada.

P.- *El secretismo ha caracterizado tradicionalmente los acuerdos de compra-venta de armas, incluso en países muy "transparentes" como los escandinavos...*

R.- Es cierto que durante la Guerra Fría la mayoría de los países ocultaban sus transacciones armamentistas. Pero ahora vivimos en un mundo diferente en el que los propios gobiernos intercambian una enorme cantidad de información sobre estos temas. Y aunque se mantiene un cierto secreto, los gobiernos de países como Suecia, Holanda, Reino Unido y Bélgica responden a las preguntas de sus ciudadanos, en particular cuando mantienen acuerdos de venta de armas con países donde se registran violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en España o Francia, no hay costumbre de responder a las preguntas de la ciudadanía, ni de los Parlamentos. Estos gobiernos deberían ser capaces de proporcionar información al respecto para demostrar que están actuando de forma responsable.